

PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

proceso

1, 6 - 15

04/05/2025

LEGISLATIVO



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

proceso



LOS ABUSOS DE CUAUHTÉMOC

\$75.00



7 503038 023650

Miles de desaparecidos en el Valle de México

Continúa en la
siguiente página



Viene de la
[página anterior](#)

Exgobernador de Morelos

Blanco, pero no limpio:

nepotismo, desfalcos,
derroches, escándalos...

Pese a librar el desafuero por el presunto intento de violación contra su media hermana, el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco enfrenta un expediente judicial marcado por escándalos de corrupción, negligencia en el DIF (donde ocho adultos mayores murieron por falta de medicamentos) y fiestas con fondos públicos en la residencia oficial. Testimonios dan cuenta sobre un sexenio de opacidad, nepotismo y un lujoso estilo de vida con cargo al erario. "Nos espera un futuro brillante", "Gobernaré con humildad", "No les voy a fallar", dijo Cuauhtémoc Blanco al asumir el Ejecutivo estatal en 2018.

ESTRELLA PEDROZA

CUERNAVACA, Mor.- Aunque logró evadir el juicio de procedencia para que enfrente la imputación penal en su contra por el presunto intento de violación de su media hermana, para el exgobernador y actual diputado federal por Morena Cuauhtémoc Blanco ese frente sigue abierto en la Fiscalía general del estado, al tiempo que surgen acusaciones de corrupción, abusos y negligencias del exfutbolista y su entorno familiar.

Denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y numerosos testimonios apuntan a negligencias del gobierno de Blanco que derivaron en la muerte de personas. En específico, señalan lo ocurrido en el sistema DIF, que estuvo a cargo de la esposa del exjugador, Natalia Rezende Moreira.

De acuerdo con una de las denuncias, durante la gestión de Rezende y en plena pandemia por covid-19 se emprendió una campaña de "austeridad" en el Albergue

[Continúa en la
siguiente página](#)



Viene de la
página anterior

Blanco Bravo y Natalia Rezende. Lujos con cargo al erario
Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com

CORRUPCIÓN



Continúa en la
siguiente página



Viene de la
página anterior



Toma de protesta. Promesas al aire

Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com

de Adultos Mayores de Temixco, lo que causó la muerte de ocho ancianos, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las denuncias también apuntan a dudosos manejos en la compra de medicamentos, desfalco en las tarjetas de pensiones de residentes en ese albergue, así como el derroche y el fastuoso estilo de vida de la pareja, que hace “una nueva vida” en la Ciudad de México.

Apenas unas horas después de que el voto de una mayoría de Morena resolviera desechar la solicitud de declaración de procedencia de desafuero en la Cámara de Diputados, a finales de marzo, la oficina del fiscal Edgar Maldonado anunció que seguiría adelante con una investigación interna y con la carpeta iniciada por la denuncia de Nidia Fabiola, media hermana de Blanco.

En la acusación por la presunta tentativa de violación ocurrida a mediados de diciembre de 2023 aparece señalado también Ulises Bravo, otro hermano de Cuauhtémoc, a su vez denunciado por su pareja, Liu León, por violencia familiar y psicológica, principalmente.

Liu León declaró ante la Fiscalía que algunas de las agresiones físicas ocurrieron frente a Cuauhtémoc ya como gobernador. Según las fechas asentadas tanto en la denuncia de Liu como en la de Nidia, Ulises golpeó a la primera un mes antes del ataque sexual de Cuauhtémoc contra Nidia.

De acuerdo con esta última querrela, la agresión sexual habría ocurrido en Casa Morelos, residencia oficial del estado. “¡Date cuenta de lo que estás tratando de hacerme!”, fue uno de los gritos que Nidia narró haber exclamado esa noche, mientras se defendía del entonces gobernador quien, aseguró, estaba fuera de sí, alcoholizado y con los ojos enrojecidos.

La mujer dijo creer que sus gritos lograron ahuyentar a Blanco, pese a que nadie de su personal, que se encontraba afuera de las habitaciones, intervino para auxiliarla.

Aunque Cuauhtémoc Blanco no vivió en la residencia oficial, la convirtió en escenario de fiestas privadas con amigos, funcionarios o familia, en las que no faltaron el derroche en gastos y, según lo señalado por excolaboradores del actual diputado –como quien fue su asesor anticorrupción, Gerardo Becerra–, abundaron el alcohol y otros excesos... incluso de violencia.



Viene de la
página anterior

Promesas de cambio

Cuando asumió la gubernatura, Blanco prometió un cambio:

“Nos espera un futuro brillante. Arrancamos con grandes retos, pero con una entrega total; gobernaré con corazón y humildad”, dijo en su toma de protesta. Aseguró: “No les voy a fallar”.

Pero durante su sexenio, la inseguridad aumentó, la opacidad se consolidó y, en algunos casos, perfeccionó los esquemas de saqueo –que él mismo criticó– iniciados por su antecesor, Graco Ramírez, a quien había prometido encarcelar. Más de seis años después, el exgobernador perredista sigue libre.

Gerardo Becerra Chávez Hita, exasesor anticorrupción del estado durante la administración de Blanco (cargo que asumió el 1 de noviembre de 2018 y al que renunció el 30 de septiembre de 2021), describe a éste como el gobernador con “mayor desinterés en el estado y sus gobernados, donde la pachanga y el agandalle eran la prioridad del mandatario y su círculo íntimo”. Tras dos años de desempeñarse como asesor contra la corrupción, Becerra renunció y presentó aproximadamente ocho denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, aportando evidencias documentadas.

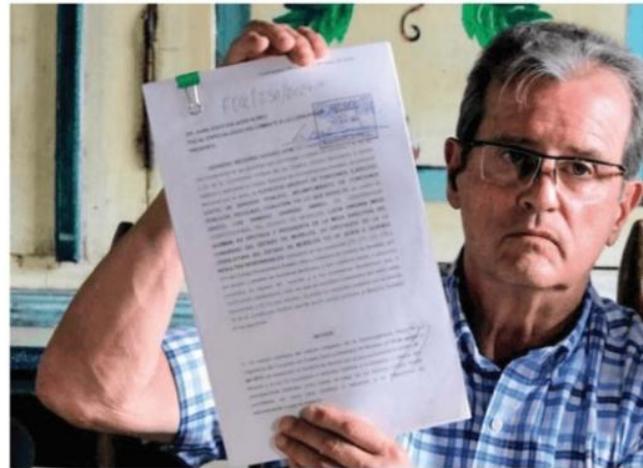
Entre éstas, destacó gastos excesivos en la residencia oficial de Morelos y nepotismo en la Representación del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México, donde fue contratada Liu León Luna, entonces pareja sentimental (hoy expareja) de su hermano Ulises Bravo, con un sueldo bruto de 56 mil 537 pesos, y derroche en la Secretaría de Seguridad Pública.

Proceso documentó varios episodios de corrupción, respaldados por denuncias formales en manos de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como testimonios de exfuncionarios y personal que todavía labora en el gobierno.

En estos casos figuran como posibles responsables integrantes de su círculo cercano, entre ellos su hermano Ulises Bravo, Edgar Riou Pérez (primo de los Bravo), su esposa Natalia Rezende Moreira (presidenta del DIF), Mónica Boggio Tomasaz Merino (exsecretaría de Hacienda y actual magistrada) y Víctor Mercado (exsecretario de Movilidad y Transporte y actual senador de Morena).

Becerra. Denuncias y evidencias

Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com



Fiestas, derroche y violencia

La Casa Morelos, residencia oficial del gobierno estatal, fue originalmente del exgobernador priista Armando León Bejarano, quien la vendió al Poder Ejecutivo tras su mandato. Desde entonces fue usada como casa de gobierno. Algunos mandatarios vivieron ahí, otros sólo la usaron para actos institucionales.

Aunque Cuauhtémoc Blanco no la habitó, convirtió la residencia en una casa de fiestas privadas y departamento de soltero. El exasesor anticorrupción Gerardo Becerra así lo describe: “Se organizaron reuniones con alcohol, drogas, mujeres y hasta un presunto intento de violación, todo eso, denunciado por su media hermana Nidia Fabiola, que ahí vivió”.

La familia Bravo la usó como jardín de eventos. “Se hacían fiestas infantiles, reuniones familiares... todo por orden directa del Témoc o de su hermano Ulises”, relató otro exfuncionario que participó en algunas reuniones, y quien pidió reservar su identidad por seguridad.

“Jesús, jefe de Residencias, organizaba todo: comida, bebidas, decoración, tornafiesta... y el gobierno lo pagaba”. Esa misma fuente calculó que las celebraciones más sencillas costaban



Viene de la
[página anterior](#)

Ulises Bravo. Violencia familiar y psicológica

Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com



arriba de 100 mil pesos, y las del gobernador hasta 300 mil. Incluso compartió fotos y videos de reuniones más relajadas con comida servida en la sala.

Relató que los encuentros de carácter "relajado" iniciaban como una sobremesa y conforme avanzaba la noche y corrían los tragos, adquirían otro tono. "Ya entrados en copas, Ulises o alguno más -a veces hasta el propio 'Temo'- pedía que llamaran a tal o cual persona, que trajeran más bebida o algunas otras cosas 'para animar'; incluso solicitaban la presencia de alguna funcionaria o de 'amigas divertidas' (escorts)", detalló.

Entre los asistentes frecuentes, además de Ulises -quien, tras separarse de su pareja Liu, vivía en la residencia oficial-, figuraban Efrén Mondragón Hernández, director de Adquisiciones del Gobierno del Estado; José Alberto Moreno Hernández, amigo cercano; Omar Taboada, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Edgar Riou Pérez, compadre de Blanco Bravo; Abdiel

Guerrero Rojas, sobrino y ahijado del exgobernador; Isaac Terrazas, exfutbolista profesional; Alexander Ismael Pisa Metcalfe, coordinador de Comunicación Social; Héctor Huerta, subdirector de Comunicación; Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, entonces secretario de Desarrollo Social y actual diputado, entre otros.

"Veíamos partidos, jugábamos backgammon u otros juegos de mesa; las conversaciones giraban en torno al fútbol o a temas locales, pero siempre en tono de burla, ya fuera sobre acusaciones de actores políticos o sobre planes de negocios. La verdad, yo sólo asistí un par de veces porque no me quedó de otra, pero siempre trataba de irme temprano, pues el ambiente se ponía cada vez más pesado, y no faltaban las discusiones", relató el exfuncionario.

Recordó, además, un episodio en el que Ulises comenzó a molestarse luego de que su escolta le informara que Liu le escribía para preguntarle dónde estaba y con quién. "Él le llamó y discutieron por teléfono. Más tarde, Liu llegó a la residencia (y discutieron). Se escuchaban gritos. Ulises reaccionaba de manera muy violenta y la agredió, pero nadie intervenía; todos seguían en lo suyo, riendo, platicando a gritos... todo muy burdo", recordó.

De acuerdo con la denuncia presentada por la propia Liu León Luna en enero de 2021, durante un cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco, Ulises la golpeó brutalmente dentro de Casa Morelos, frente a varias personas, tras una discusión por una presunta infidelidad. En aquella ocasión, inclusive el propio Cuauhtémoc tuvo que intervenir para frenar la agresión.

Las reuniones "para el desestrés", realizadas en la residencia -como las llamaba el exmandatario- solían verse empañadas cuando Natalia Rezende llegaba sorpresivamente y hacía reclamos a Cuauhtémoc.

Quienes se encontraban en el lugar, poco a poco comenzaban a escabullirse: algunos salían al patio, otros se desplazaban hacia la terraza.

Antes de renunciar, Becerra documentó los excesos en cuanto a los gastos por las francachelas y celebraciones familiares del gobernador y sus allegados. "Había facturas de carnes frías, vinos, postres, súper y Oxxo. Sólo en un año sumaban más de dos millones de pesos", denunció. Esa información fue presentada en denuncias formales.

El centro Morelos Rinde Cuentas también detectó gastos irregulares. Sobre la residencia, encontraron casi 350 mil pesos sin comprobación. "Seguimos solicitando esa información", dijo su director Roberto Salinas.



Viene de la
[página anterior](#)

La actual administración, mediante la contralora Alejandra Pani, dijo que todavía no hay acceso a toda la información. Aunque la entrega-recepción ya terminó, será hasta que concluyan las auditorías federales cuando se conozcan los detalles. Aseguró que no se protegerá a nadie.

Entre los escándalos, que incluyen la filtración de un video donde Natalia Rezende habla de violencia familiar, el exgobernador y su esposa hacen una nueva vida, de regreso a la Ciudad de México, donde ahora reconstruyen y reamueblan por completo su casa en Jardines de la Montaña, donde residen artistas y cantantes.

Una persona allegada a la pareja contó que "la tiraron toda. Natalia contrató arquitectos de Brasil para diseñarla desde cero"; todos los acabados y muebles han sido traídos desde ese país.

Mientras la construcción avanza, viven en una casa rentada justo al lado. "En unos meses se mudan", aseguró la fuente.

Además, Cuauhtémoc mandó construir una casa de descanso en la exclusiva zona de Tabachines, en Cuernavaca, cerca de donde vivió -ya que ahí rentaba cuando fue alcalde y gobernador. "Apenas van empezando, pero el terreno es grande y Témod está muy entusiasmado -aseveró la fuente allegada-. Dice que en Cuernavaca se descansa sabroso". El residencial tiene campo de golf, entre otros lujos.

DIF Morelos, agencia de colocación

Al asumir Cuauhtémoc Blanco la gubernatura, su esposa, Natalia Rezende Moreira, quedó al frente del sistema DIF.

Desde su llegada al DIF, Natalia Rezende convirtió la institución en una plataforma para beneficiar a algunas de sus amistades, principalmente de Brasil, su país de origen, como fueron los casos de Daluma Da Silva Mendes y Janaina Sora Neves, quienes fueron nombradas funcionarias sin cumplir con los requisitos del Estatuto Orgánico de la institución.

Daluma, licenciada en Mercadotecnia, fue contratada el 13 de marzo de 2019. En sólo cinco días ya era analista administrativa y un mes después recibió dos ascensos meteóricos: primero como directora de Vinculación Interinstitucional y luego como coordinadora de Relaciones Públicas. Su sueldo pasó de 24 mil a casi 65 mil pesos. Testimonios recabados por **Proceso** indican que dejó de ir a trabajar desde 2021, aunque siguió cobrando su salario.

Janaina, quien se presentó como comunicóloga y exreportera en Brasil, también fue nombrada coordinadora. Sin antecedentes profesionales para las funciones del DIF, ingresó con un

Rezende. El DIF para sus amigos

Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com



Continúa en la
[siguiente página](#)



Viene de la
página anterior



salario de más de 24 mil pesos y llegó a ganar más de 45 mil al mes.

En la nómina del DIF figuró también Itzel Olga Bravo Chavelas, prima de Cuauhtémoc Blanco. Aunque fue nombrada subdirectora del Albergue del Adulto Mayor, operaba como administradora. Su salario, según registros oficiales, era de cinco mil 480 pesos, pero personal del DIF asegura que recibía un bono extra.

Alexis Sánchez Peláez entró en 2018 como asistente y en 2020 ya era subdirectora del Re-

fugio de la Casa de la Mujer, pese a contar con estudios hasta el bachillerato. En 2022, de acuerdo con información oficial, fue jefa de brigada con sueldo de 15 mil pesos, sin que se precisaran sus funciones.

María del Pilar Tayero, cercana a Alexis, fue directora del DIF desde 2020, tras dos años en Fortalecimiento Familiar. Es psicóloga con maestría en Psicoterapia. Otro caso fue Antonio Lestrade, excurador del Museo Morelense, quien ingresó al DIF en 2019 como subdirector y luego pasó a Vinculación Interinstitucional. No hay registro de su salario. Los testimonios señalan que ambos tenían cercanía con Natalia Rezende.

Continúa en la
siguiente página



Viene de la
[página anterior](#)

El abrigo de la 4T

Foto: Facebook / Ulises Bravo



A mediados de 2020, en plena pandemia, varios empleados del DIF presentaron una queja ante la Jefatura de Gobierno denunciando maltrato laboral, contrataciones sin perfil adecuado y extranjeras en la nómina, lo cual violaba la Ley Federal del Trabajo. Nunca obtuvieron respuesta.

A principios de 2021, ante las constantes quejas y algunas menciones en columnas periodísticas locales, algunos de estos funcionarios fueron cambiados de área "para calmar la presión", dice un excolaborador en esa administración.

CORRUPCIÓN

Antonio Lestrade e Itzel Bravo fueron reubicados en la Secretaría de Turismo y Cultura, el primero como secretario técnico estatal e Itzel como coordinadora de Enlace Ejecutivo y Relaciones Públicas.

Lestrade gozaba de privilegios gracias a su cercanía con Abdiel Guerrero Rojas, sobrino de los Bravo y ahijado del gobernador, quien a su vez fue nombrado en 2019 como director general de Competitividad Turística, y donde llegó a cobrar más de 60 mil pesos en 2022, ya como coordinador de Desarrollo Turístico.

En 2023 Lestrade fue acusado de violencia laboral y de género por Amaranta Leyva, responsable de espacios culturales. Renunció a raíz de esta denuncia, pero no hubo acciones en su contra por esos hechos.

Austeridad mortal

Como presidenta del DIF, Natalia Rezende dio instrucciones a directivos del Albergue de Adultos Mayores de Temixco (un centro de asistencia social donde viven personas sin familia o bajo resguardo del Estado) para reducir medicamentos en 2020, al comenzar la pandemia por covid-19, con el argumento de la austeridad gubernamental impulsada por el entonces presidente López Obrador, pese a que eran necesarios, pues la mayoría de las personas institucionalizadas padecía de demencia, enfermedades crónicas o trastornos psiquiátricos.

Pero Rezende también dio otras instrucciones que el director del albergue, Leodegario Almanza Ponce, señaló como inadecuadas para el cuidado de los adultos mayores.

"No quedó de otra que hacer lo que pedía", recordó Almanza. En noviembre de 2020 Natalia ordenó recortar aún más los medicamentos, alegando falta de presupuesto. "Le dije: 'Oye, Natalia, ni el PRI me pidió eso'. Trabajé con el PRI, PAN y el PRD. Ninguno se atrevió a tanto", dijo Almanza Ponce a **Proceso**.

Durante la pandemia, el DIF dejó sin medicamentos a 25 adultos mayores en el albergue de Temixco. "Al principio pensé que era un error. Compré lo necesario con mis propios recursos y donaciones. Luego entendí que era parte de un supuesto plan de austeridad... aunque los pocos medicamentos que llegaban tenían precios inflados", narró Leodegario Almanza, quien semanas después fue despedido sin finiquito.

Poco a poco, la salud de los usuarios se deterioró. En enero de 2021, aunque Almanza ya no estaba en funciones, el personal le seguía pidiendo ayuda. "Había fiebre, saturaciones de 70%. Nadie los canalizaba a hospitales. Los pacientes psiquiátricos, sin medicación, sufrían. Eso es tortura institucional", señala.

Por esto, el 19 de enero Almanza presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (expediente CDHM/SE/V3/061/013/2021). Se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción

Continúa en la
[siguiente página](#)



Viene de la
página anterior

Las respuestas tardaron. Hasta el 22 de febrero, el gobierno estatal reportó que tenían medicamentos básicos y se aplicaron pruebas de covid-19. También enviaron 24 certificados médicos y un acta de defunción: Manuel Salgado Montes murió tras cinco días con síntomas, nunca fue llevado a un hospital.

El 26 de febrero, la Fiscalía abrió la carpeta FCC/035/2021-0 por presunto desvío de recursos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) registró ocho fallecimientos en total. Pero el vicefiscal Edgar Urquiza negó a la CDHEM acceso a la carpeta y sus avances.

La comisión confirmó que la falta de pruebas, la atención médica insuficiente y medidas de aislamiento permitieron la propagación del covid 19 en el albergue.

La investigación también reveló desabasto de medicamentos y la contratación de personal sin experiencia.

La CDHEM confirmó que ocho muertes fueron resultado de la omisión de cuidados: Manuel Salgado Montes de Oca, Irene Martínez Sánchez, Modesto Salinas González, Domingo Villa García, David Navarro Hernández, Osvaldo Hernández Cruz, Salvador Becerra Guerrero y Victoria Gómez Chávez. A pesar de las medidas cautelares, siguieron las muertes.

El 23 de marzo de 2022, la CDHEM resolvió que hubo violaciones graves a los derechos humanos, en especial al derecho a la vida y la salud. Emitió una recomendación al gobernador y a las autoridades del DIF, pidiendo también la intervención de las fiscalías estatal y Anticorrupción. Además, se reconoció a los 25 usuarios del albergue como víctimas directas, con derecho a indemnización y atención especializada, y se dejó abierta la posibilidad de incluir a otros afectados, como el sobrino de Salvador.

La CDHEM solicitó que se iniciaran procedimientos administrativos contra los responsables, que se ofreciera una disculpa pública y que se colocara un memorial con los nombres de las víctimas. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco no aceptó la recomendación.

Se solicitó entrevista sobre el caso al vicefiscal anticorrupción, Edgar Urquiza, pero no hubo respuesta y se desconoce el avance de la investigación penal. Más de tres años después, no se han fincado responsabilidades por las muertes en el albergue.

Otros desfalcos

El exdirector del albergue, Leodegario Almanza, evidencia otras anomalías en los manejos del DIF: detectó compras de medicamentos a sobreprecio con un solo proveedor: Farmacia Cuernavaca.

“Armé una carpeta con facturas infladas. Todo costaba el doble o triple. Por eso no alcanzaba el presupuesto: estaban robando”, dijo.

En facturas de 2020, la Levodopa/Carbidopa aparecía en mil 285 pesos y la Risperidona en mil 415, aunque en farmacias costaban menos de 500. También se ignoraban descuentos por compras continuas.

Roberto Salinas, codirector de la organización Morelos Rinde Cuentas, señala que la opacidad marcó todo el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. “Nunca hubo voluntad de hacer las cosas bien”, afirmó.

Por otro lado, durante años, las tarjetas de la pensión para adultos mayores fueron retiradas a los beneficiarios del Albergue del DIF con el argumento de que “no las necesitaban”. Esa práctica, aseguraron extrabajadores de la institución, fue iniciada en el sexenio de Graco Ramírez y se usaba para cubrir viáticos del personal.

En 2020, cuando la Secretaría del Bienestar federal lanzó una campaña para renovar tarjetas, el DIF se encargó de las gestiones. Fue entonces que varias residentes del albergue acudieron al banco y descubrieron que sólo tenían ocho mil pesos, una cantidad ínfima pese a no haberlas usado en años.





Viene de la
página anterior

Francachelas en Morelos

Foto: Margarito Pérez Retana @Cuartoscuro



Algunos empleados inconformes con esa situación investigaron y descubrieron que seguían retirando dinero. Calculan un desfaldo de al menos 700 mil pesos. No había registros ni controles sobre las tarjetas.

Rafael Brito Miranda –entonces procurador del DIF y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia– informó a Natalia Rezende sobre la presunta corrupción con el manejo de las tarjetas de los pensionados y propuso levantar un acta notariada para reportar el caso y dar de baja las tarjetas de personas fallecidas.

Así se hizo, pero la práctica se reactivó después de unos meses: “Usaban parte del dinero para desayunos y el resto ‘iba al guardado de Natalia’, así lo decían”. Añadió que el tarjetazo siguió casi hasta el final del sexenio, cuando “empezaron a guardar las formas”. 🗨️